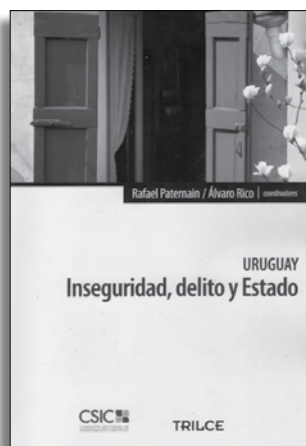


URUGUAY

INSEGURIDAD, DELITO Y ESTADO

Rafael Paternain y Álvaro Rico (coord.)

CSIC-Trilce, Montevideo, 2012, 263 pp.
ISBN 978-9974-32-592-0Por Marcos Rey¹

En la búsqueda de abordar las diversas formas en las que se manifiesta la violencia en la sociedad uruguaya y sus vínculos con otros fenómenos sociales, este libro colectivo presenta una pluralidad de avances académicos acumulados en la última década. Es una obra más amplia que compilaciones anteriores, restringidas al campo de la sociología, al recoger aportes de la ciencia política, la historiografía, el psicoanálisis, el derecho y la antropología social. De modo que resitúa el debate de la inseguridad, la violencia y la criminalidad en una dimensión histórica e interdisciplinaria, y avanza en un programa de investigación que se propone recorrer una agenda propia, alineada pero crítica, con respecto a los desafíos que emerjan del diseño de las políticas públicas.

En un contexto donde las políticas de seguridad ciudadana siguen apegadas a la hegemonía conservadora y al consenso punitivo —como lo muestran el aumento de las penas a los menores infractores, los embates por la baja en la edad de imputabilidad o las oscilaciones del modelo de gestión de la seguridad—, este libro propone transitar el debate público por nuevos carriles. Aunque hay un reconocimiento de que los últimos años han sido auspiciosos para la producción académica y para la institucionalización de los nuevos saberes en el aparato estatal, el beneplácito aplastante de la ciudadanía a una mirada reduccionista de la violencia y la inseguridad pone de manifies-

1 Profesor de Historia (IPA), periodista del semanario *Brecha* y columnista de *Tevé Ciudad*.

to el intercambio desigual en la producción y la circulación mediática de los discursos sociales.

El libro se inscribe en el marco del proyecto Cuarenta Años de Violencias: desde el Estado y en la Sociedad Uruguaya (1968-2008), impulsado por un grupo de investigadores de las ciencias sociales y las humanidades que procuró, con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (CSIC), sistematizar los avances académicos y conformar ámbitos de difusión e intercambio que hicieran foco en las violencias institucionales sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Si bien los coordinadores reconocen que la disparidad de líneas teóricas, metodológicas y empíricas de los 14 trabajos de este libro implican una menor coherencia teórica y temática, se pueden destacar al menos dos ejes analíticos convergentes.

En primer lugar, la mirada interdisciplinaria parece cristalizar con mayor nitidez cuando se abordan los impactos que ha tenido la construcción de un enemigo urbano, el joven pobre, y las marcas sociales, geográficas, etarias, y de género que lo atraviesan. Los trabajos muestran cómo se condensan en este sujeto peligroso los miedos urbanos de la población, a la vez que se mantienen en penumbras las violencias estructurales e institucionales que recaen con mayor fuerza sobre los jóvenes más vulnerables. En esa línea, Verónica Filarido hace foco en los factores que generan miedo urbano y que afectan el uso de la ciudad, la integración social y la calidad de vida. Analiza al joven, pobre y varón, como síntesis del sujeto sospechoso, los lugares a los que traslada su estigma, las situaciones temporales o espaciales resignificadas desde el temor y las diversas estrategias para enfrentar el miedo. Luis Eduardo Morás indaga cómo la utilización política del miedo, en tanto control social, alimenta una agenda conservadora que se apoya en la noción de jóvenes inservibles de los centros educativos y de menores infractores incorregibles; residuos del crecimiento económico y de la desigualdad de origen que el sistema educativo en lugar de combatir, consolida. Los antropólogos Ricardo Fraiman y Marcelo Rossal parten de tres investigaciones etnográficas —el círculo vicioso calle-INAU-refugio-cárcel, un liceo de Malvín y la violencia en el tránsito— para probar cómo las respuestas institucionales del Estado reproducen la violencia estructural al naturalizar las desigualdades que golpean a los jóvenes más pobres. Nilia Viscardi analiza el lado femenino de la exclusión a través de una investigación centrada en las adolescentes infractoras y en la intersección de múltiples violencias: las que emergen del abuso sexual, la prostitución, el robo y el tráfico de drogas. Y Víctor González considera las altas tasas de suicidio del país como reflejo de la violencia estructural y destaca no sólo cómo afecta en mayor proporción a los jóvenes humildes, sino también cómo determinados períodos de movilización social operan como “amortiguadores” de los

suicidios, mientras que otros, en los cuales se manifiesta el repliegue de la protección estatal, lo hacen como “multiplicadores”.

En segundo lugar, el desplazamiento hacia miradas que subrayan la dimensión histórica de la violencia y la inseguridad atraviesa incluso aquellos trabajos que no transitan específicamente a través de un eje diacrónico. La investigación de Gabriel Kaplún, por citar un ejemplo, analiza las connotaciones estéticas, clasistas y sociales de las culturas juveniles, y lo hace historizando y localizando las desigualdades. Rafael Paternain examina las bases en las que se asienta el sentimiento de inseguridad, y destaca cómo ha corrido en paralelo con la desestructuración social y el sentimiento de vulnerabilidad ante procesos de cambio estructural. Las huellas de estos procesos de segregación y desigualdad interpelarían así, tanto al consenso conservador, como al modelo de desarrollo y al populismo punitivo. Álvaro Rico analiza las inercias represivas del Estado a través de continuos del pasado autoritario, que se han sedimentado en el presente democrático y que permiten su reproducción por medio de relaciones autoritarias de poder. Así vincula el delito y la política, a la vez que la ampliación de la injerencia del Estado en el disciplinamiento social, con la ilusión represiva del presente delictivo. Carlos Demasi repasa las formas olvidadas de la violencia social en períodos de la historia reciente que han sido presentados como “oasis de paz” —el neobatllista o la dictadura— y revista algunos hechos paradójicos que, desde la restauración democrática, han sido utilizados en beneficio de la manipulación política. Rafael Bayce realiza un recorrido por algunos hitos teóricos y empíricos de las ciencias sociales sobre la seguridad.

Por otra parte, la incorporación de otras disciplinas, tradicionalmente relegadas en estos debates, enriquece la obra a pesar de que sus aportes no parecen sistematizados. Marcelo N. Viñar reflexiona desde el psicoanálisis en torno a cómo los cambios en el tejido social impactan en los procesos que hacen a la construcción permanente de los sujetos en su relación con los otros, y al impacto que tienen el castigo y el encierro como políticas institucionales de rehabilitación que necesitan ser repensadas. Oscar Sarlo esboza algunas reflexiones referidas a la dimensión jurídica de la inseguridad y en torno a las claves de un diseño institucional de calidad, aunque lo hace desde la teoría del derecho, con lo cual algunos problemas jurídicos relevantes no son abordados, como las tensiones entre el derecho internacional y el derecho interno en materia de seguridad ciudadana o las cuestiones de política comparada referidas al abordaje de la seguridad en otros sistemas jurídicos. Finalmente, mientras Alejandro Vila analiza desde la ciencia política los cambios en la matriz policial uruguaya de los últimos cuarenta años y repasa el marco normativo y organizativo de la Policía, los sociólogos Francisco Pucci, Emiliano Rojido, Nicolás Trajtenberg y Ana Vigna introducen la discusión teórica y las

categorías más relevantes de la literatura especializada en torno a las explicaciones sobre la reincidencia o el abandono de la vida delictiva.

Quizás, porque pueda estar presente el riesgo de caer en una sumatoria de temas y de enfoques, que no terminen de cuajar en una agenda propia de investigación interdisciplinaria, es que los coordinadores de esta obra proponen cuatro ejes estratégicos para la acumulación académica: reinsertar la discusión en relación con el actual modelo de desarrollo; desarrollar una teoría de la acción social que recorra otras zonas de la violencia y la criminalidad; generar conocimiento sobre las formas de gobierno de la seguridad ciudadana; e historizar los procesos de violencia, criminalidad e inseguridad en el marco de la protección de los derechos humanos. Toda una necesaria y ambiciosa agenda que afortunadamente está en marcha.